



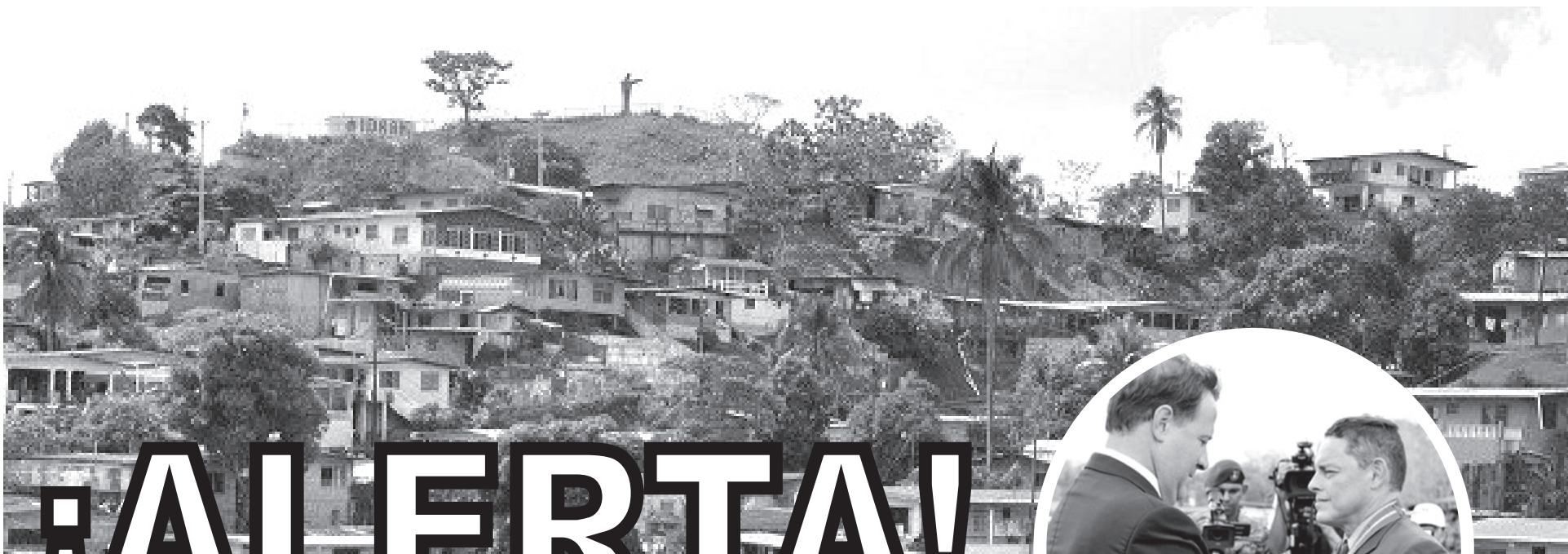
Palabra Pública

Panamá, mayo de 2017

La Voz del Movimiento Social Panameño

Nº 38

“Señores: oíd una palabra pública: ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere... yo muero como murió Jesucristo...”



¡ALERTA! SAN MIGUELITO!

Estamos en condición de informar que hubo una reunión interinstitucional en la Alcaldía de San Miguelito en la que participaron funcionarios del Municipio, incluido el propio alcalde, Gerald Cumberbatch, e integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Águila (Policía, SINAPROC, etc.).

Dicha reunión era supuestamente para determinar zonas de riesgo en San Miguelito para proceder con el desalojo de las familias que allí residen. Ya establecieron como zonas de riesgo Samaria, Tres Torres, Corredor de Los Pobres y Nueva Libia, entre otras comunidades.

Igual que viene aconteciendo con otras comunidades, no se realiza ninguna consulta a los afectados sino que se procede por la fuerza al desalojo de las familias, bajo un enfoque

eminentemente militar. Quien dirige los operativos pero no da la cara, es el ex jefe de SENAFRONT, Frank Abrego, hoy jefe de seguridad de la Unidad de Áreas y Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ya conocemos que en el desalojo forzoso en Pedregal, las 800 familias fueron arrinconadas al lado del río Tapia, con los consabidos riesgos y peligros que esto implica, viviendo prácticamente a la intemperie, y en el caso de Vista al Mar, Veracruz, Arraiján, se adujo razones humanitarias en la acción que cobró la vida de Demetria Montenegro Ramos, y a las familias que aceptaban retirarse voluntariamente se le ofrecieron 900 balboas (para sufragar alquiler por 6 meses, 200 de inmediato y 700 en 15 días) y una carpa.

En el caso de San Miguelito se contempla darle alguna compensación solo a aquellos que muestren títulos de propiedad.

Nuevamente miles de efectivos de la Fuerza Águila, al mando de Frank Abrego, serán utilizados en este gran operativo de desalojo forzoso que viola flagrantemente los derechos humanos y el derecho de los panameños a una vivienda digna.

Una vez más se confirma lo que hemos venido denunciando que Varela mintió cuando anunció la creación de la Fuerza Águila. Dijo que era para combatir el narcotráfico, el pandillerismo y el hampa y no ha sido así, se viene utilizando para reprimir a los pobres mientras crece la ola de violencia e inseguridad ciudadana y las calles se tiñen de sangre. Solo la semana

pasada y lo que va de esta han ocurrido más de 15 asesinatos.

Incluso Varela dijo que la Fuerza Águila era para enfrentar el femicidio y ya van dos mujeres víctimas fatales de los desalojos forzosos, Adelaida García y Demetria Montenegro.

Denunciamos que trassupuestos propósitos “humanitarios” que utiliza el gobierno para impulsar estos desalojos forzosos, se esconde el interés de favorecer grades proyectos de ciertos inversores y sus negociados, particularmente del número uno de los ultra millonarios de Panamá, Stanley Motta.

El Movimiento Comunal Nacional Federico Britton, junto a FRENADESO y sus fuerzas, enfrentarán con el pueblo estas injusticias y esta guerra que el Gobierno de Varela ha declarado contra los pobres.

“cuanto duele escuchar que a los asentamientos pobres, se les margina...”

Síguenos en las redes sociales



www.frenadesonoticias.org
noticiasfrenadeso@gmail.com



@frenadeso



Frenadeso Noticias



Frenadeso Noticias
La Voz de Frenadeso.
Movimientos Sociales de Panamá

¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!



Sintoniza
**LA VOZ DEL SUNTRACS
Y DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES**

Los martes de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. por KW Continente
710KHz AM (Panamá), 94.1 MHz FM (Colón), 95.9 MHz FM (Panamá),
96.1 MHz FM (Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas)
y 96.3 MHz FM (Bocas del Toro y Chiriquí).

¡LA PELEA ES PELEANDO!



DESALOJOS FORZOSOS

y las falacias en medios y redes sociales

¿Es un delito la ocupación de tierras?

Falso. Una de las modalidades para adquirir un terreno es cuando una persona pide posesión de éste al haberlo ocupado ininterrumpidamente y de forma pacífica por 15 años. Esto legalmente se llama “*prescripción adquisitiva de dominio*”. Para que aplique esta prescripción no se requiere la autorización del dueño del terreno al momento de la ocupación. En otras palabras, es una de las formas legítimas de adquirir una propiedad privada de acuerdo a las leyes y a nuestra constitución. Tan es así que hasta Varela Hermano S.A. prescribió una finca en Herrera a través de posesión ininterrumpida y así han hecho otros gamonales y millonarios en el país.

¿Es justo calificar a panameños de invasores y de robar tierras?

No. Calificar de invasión y robo de terrenos es un absurdo, esto está simplemente en el léxico de los que desconocen las leyes. Lo peor es que abundan muchos en medios y redes sociales haciendo señalamientos sin pruebas y confesando así una gran ignorancia sobre el tema. Ocupar terrenos con un interés social, los cuales están en desuso, baldíos, ociosos, abandonados, sin

mantenimiento, que representan por años un peligro para la salud y la seguridad de las personas, para levantar allí viviendas que son una necesidad, no es un delito. Esto lo reconoce las Naciones Unidas y convenios internacionales sobre el hábitat y los derechos humanos.

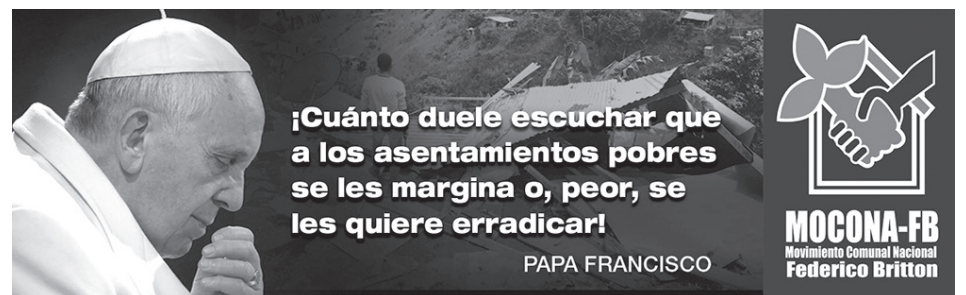
¿Existe jurisprudencia en Panamá sobre este tema?

Hay profusa jurisprudencia. Por ejemplo, existe un fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia del 23 septiembre de 2015, cuando declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 44 de 19 de julio de 2013 que pretendía sancionar con cárcel de uno a tres años a los mal llamados invasores de tierra, reconociendo así que no es un delito la ocupación de tierras en las circunstancias arriba descritas. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el abogado Renaul Escudero. No pueden calificarse de invasores, además, porque son panameños en su propia tierra. No es robo. Los delitos de robos, se tipifican en el Código Penal

en los artículo 237 al 242, ambos inclusive, señalando el art. 237 que: “*Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas.*” Estos panameños no ejercieron la fuerza ni la violencia ni la intimidación al ocupar estas tierras y no hubo ánimo de lucro sino necesidad de vivienda.

¿La ocupación de tierras es un hecho aislado en Panamá?

No. Incluso la Alcaldía capitalina, en su interés de aumentar el impuesto de inmueble mediante la revalorización, admitió que al menos el 40% de las propiedades en la ciudad capital carecen de título de propiedad y el MIVIOT ha reconocido en sus censos que el 99% de las personas que viven en asentamientos humanos de esta naturaleza tienen efectivamente esa necesidad de vivienda. Barriadas, corregimientos y distritos como San Miguelito, Mañanitas, 24 de Diciembre, Las Cumbres, Chilibre, Curundú, Alcalde Díaz, Panamá Viejo, San Francisco, Tocumen, Pacora, Chepo, además de comunidades en Arraiján y La Chorrera, entre otras, surgieron de ocupaciones de tierra. Hoy viven allí más de un millón de personas.



¿Hay personas que lucran con las ocupaciones de tierra?

Puede haber personas haciendo negocios con estas tierras como se ha denunciado, pero es una ínfima minoría. Repetimos, el MIVIOT en sus estudios y censos reconoce que el 99 % en esos asentamientos humanos son panameños en necesidad de vivienda, la gran mayoría niños y madres solteras.

El Derecho a la Vivienda y los Derechos Humanos

“Los Derechos Humanos, incluso los derechos a vivienda adecuada y a agua potable y saneamiento están en la Declaración Universal

de Derechos Humanos y en instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificados por la mayoría de estados miembros de la ONU. Estos derechos, una vez respaldados, no tienen un carácter voluntario. Estos derechos imponen obligaciones a los Estados y a la comunidad internacional, son universales, no se puede renunciar a ellos ni pueden ser suprimidos, y gozan de protección legal. La Declaración Universal de Derechos Humanos hace referencia a la vivienda adecuada en su artículo 25. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también hace referencia al mismo derecho en el artículo 11.”

¿Se reconoce el derecho a la vivienda en nuestra constitución?

De acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política de Panamá: “El Estado establecerá una política nacional de vivienda, destinada a proporcionar el pleno goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los de menor ingresos.” Pero los gobiernos no lo cumplen y, en el mejor de los casos, se ofrecen paliativos que no responden

mínimamente al requerimiento de una vivienda digna, en base a los estándares de calidad, espacio y seguridad.

¿Qué es un desalojo forzoso?

La definición según Hábitat Naciones Unidas: “El desalojo forzoso es el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.

Los desalojos forzosos en Panamá

Se vienen desarrollando de manera arbitraria violándose el debido proceso, sin orden de autoridad competente, sin notificar a los afectados. En el caso de las comunidades de Pedregal, donde fueron desalojadas 800 familias, incluso existía un amparo de garantías que fue desconocido



por las autoridades y la policía. Un informe de la Defensoría del Pueblo ratifica estas violaciones al debido proceso y el abuso de autoridad.

La Fuerza Águila y los desalojos forzosos



El Gobierno de Varela utiliza la Fuerza de Tarea Conjunta Águila creada supuestamente para enfrentar el crimen, las pandillas y el narcotráfico para desalojar a familias humildes, cortándole previamente la luz y el agua y atemorizando a la población. Los desalojos forzosos no implican necesariamente el uso de la fuerza física. De acuerdo a la ONU: “Las personas pueden verse obligadas a abandonar sus casas o sus tierras a causa de acoso, amenazas o cualquier otro tipo de intimidación.”

¿Qué intereses hay detrás de los desalojos forzosos?

Generalmente se trata de intereses de grandes terratenientes e inversores nacionales e internacionales. En el caso de Cerro Galera son bienes revertidos que retornaron a Panamá producto de la gesta histórica del 9 de Enero de 1964 y hoy se le niega al pueblo

Sabías que Varela Hermanos, S.A. fueron “invasores”

Varela Hermano S.A. ocupó una finca que luego prescribió en Herrera a través de posesión ininterrumpida como han hecho otros gamonales y millonarios en el país. De ellos medios y cierta gente en redes sociales no hablan, pero sí atacan a los pobres y los desalojan.

La prohibición de los desalojos forzosos según el derecho internacional

Los desalojos forzosos constituyen violaciones graves de los derechos humanos. Cortar el suministro de agua o electricidad u otros intentos para que sea insostenible que alguien permanezca en su casa pueden constituir desalojo forzoso. Si un ocupante abandona su casa por un periodo, ya sea voluntariamente o debido a un desastre natural o un conflicto, por ejemplo, y luego no se le permite volver, la situación también puede constituir desalojo forzoso.

Artículo 46: Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad o de interés social resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés del público o social.


¿Existen desalojos humanitarios?

Es otra falacia más de las autoridades. Son desalojos forzosos. Cómo pueden ser humanitarios cuando se realizan cortes de luz y de agua, se irrespetan acuerdos alcanzados entre las comunidad y autoridades, cuando se impide el ingreso de medios de comunicación al área, cuando se llega con uniformados armados hasta los dientes, cuando se viola el debido proceso, cuando no se le ofrece una solución de vivienda a los afectados, solo 900 balboas y una carpa. Y cuando una mujer del pueblo muere, como ocurrió en Vista Al Mar de Arraiján, el sábado 13 de mayo, al caerle a la señora Demetria Montenegro Ramos una pared que derrumbaban con mazos, sin medidas de seguridad ni profesionalismo, delincuentes vestidos de civil. Ahora de conoce que también se pretenden


realizar desalojos forzosos en San Miguelito en comunidades como Samaria, Nueva Libia y Tres Torres, entre otras.

El Papa y los desalojos forzosos

Es un tema de preocupación del Papa Francisco. En su discurso sobre las tres “T”: Tierra, Techo y Trabajo, el 28 de octubre de 2014, en El Vaticano, expresaba: “Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios... pero abandonan a una parte de sí en las márgenes, las periferias. ¡Cuánto duele escuchar que a los asentamientos pobres se los margina o, peor, se los quiere erradicar! Son crueles las imágenes de los desalojos forzosos, de las topadoras derribando casillas, imágenes tan parecidas a las de la guerra”. Y esto se ve hoy y se ve en Panamá, el “Dubái de América Latina” donde ya en el pasado organismos de derechos humanos internacionales le han llamado la atención al Estado panameño por ese proceder.



VARELA le declara la guerra a los pobres y aquí: ¡la pelea es peleando!



humilde vivir allí. Ha trascendido que dichos terrenos fueron subastados por el MEF UABR a un precio base de 17 millones de dólares en diciembre de 2016. La experiencia demuestra que posteriormente estos terrenos son tomados para proyectos de lujo, residencias, hoteles, centros comerciales, etc.

El interés social sobre el privado en la Constitución

Artículo 45: La propiedad privada implica obligación para su dueño por razón de la función social que debe llenar. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la Ley, puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización.

Panamá. 15 de mayo de 2017.



FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Alto a la privatización del IDAAN

Ante proyecto de Ley 44, Hoy, proyecto de Ley 396

QUE REORGANIZA EL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS NACIONALES (IDAAN)

Esta iniciativa legislativa ejercida por el diputado JUAN CARLOS ARANGO, en el mes de agosto de 2016, quien es

miembro del Partido Popular que forma parte del actual Gobierno.

Entre las motivaciones de este proyecto de ley y que son



expresadas por el proponente, se encuentra la necesidad de reorganizar la institución para que la misma sea más dinámica y eficiente y se adecue al siglo XXI. Advierte que se realizaron

consultas, sin establecer con que sectores de la sociedad panameña se realizaron en donde se subroga la ley 77 del 2001 que tiene como objeto reorganizar la institución en el

campo administrativo, hacerla mas eficiente en cuanto a la administración de sus recursos y establecer soluciones a los problemas básicos de administración de recursos humanos y toma de decisiones.

Advierte que el debate no debe llevar necesariamente a la privatización, no obstante se hace énfasis en que la institución ha sido renuente por razones paternalista, concesionar el cobro de los pagos puntuales y correctos por la prestación del servicio de agua a la población.

Hay que destacar que esta reorganización al ser una iniciativa del Partido Popular tiene un claro concepto neoliberal ya que esto ha sido la característica de los miembros de este Partido al proponer leyes de este tipo, recordemos reformas de la Caja del Seguro Social, entre otros.

Existen artículos como el N° 12 que establece entre las funciones de la Junta Directiva que en su numeral 8 le da como función la de aprobar las políticas sobre realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, que complemente el FUNCIONAMIENTO DE LA AUTORIDAD, ya sea directamente por esta o POR CONCECION A TERCEROS.

Esta facultad deja abierta la posibilidad de tercerización o privatización de servicios de cobros , instalación, cortes y reparación de daños, llama la atención la conformación de la Junta Directiva de la institución la cual nueve de sus miembros serán designados por el Presidente de la Republica, sin que se establezcan que sectores de la sociedad representan estos miembros, por los que los nueve designados podrían ser empresarios.

A pesar de que la nueva Autoridad, es autónoma con personería jurídica y patrimonio propio con fondos separados e independientes del Gobierno Central, la facultad del Presidente de la República del Consejo de Gabinete en intervenir, fiscalizar, evaluar y aprobar decisiones directas. lo que desvirtúa la supuesta autonomía, algunos ejemplos lo tenemos en los siguientes artículos 12 numeral 5, 7 y 17 acápite C, artículo 15 numeral 2, 3 y 4.

La figura de la creación del fondo de subsidio que será constituido a través de un fideicomiso cuyo fideicomitente será el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional el Fiduciario, esta figura eminentemente del mundo financiero hay que estudiarla y analizarla con los experto en el tema y determinar cuáles son los beneficios y limitaciones y posibles riesgos de la utilización de la implementación de este fondo en una entidad pública tan limitada en la autonomía en su funcionamiento.

En cuanto a este régimen laboral

En el contexto general este proyecto de Ley establece diferencias sustantivas entre funcionarios y trabajadores, este ultimo término es desarrollado en el artículo 2 que en su numeral 12 lo define como “salvo los funcionarios, las demás personas naturales que forman parte de la fuerza laboral de la autoridad y define el término funcionario como el administrador el sub-administrador, gerentes, gerentes regionales y los que por reglamentos se adscriban a tal categoría y denominación.

Como podemos observar en materia de relaciones laborales existen 2 denominaciones cuya categoría será determinada por vía de un reglamento, el cual es desconocido hasta este momento y la Junta Directiva quien lo aprobara y el termino trabajadores quienes serian todos los que no estarían dentro de la categoría de funcionario, esta contradictoria denominación entre los términos funcionarios y trabajadores deja claro que en materia de régimen laboral



habrá servidores o funcionarios públicos dentro de la Institución y trabajadores a cargo de empresas tercerizadas que formaran parte de la fuerza laboral de la nueva autoridad.

A nuestro juicio esta situación es la que deja claro que la institución con este proyecto, será parcial o totalmente privatizada, es probable que se excluya de la intención privatizadora el aspecto del régimen administrativo, junta directiva, administrador, gerente regional, fiscalizador general y el resto del personal podría estar privatizado.

El capitulo IV del proyecto de ley aborda lo relativo a la administración del personal y relaciones laborales.

En cuanto a este tema es necesario señalar que hay un proyecto de ley de relaciones colectivas en el sector público, que de manera consensuada se aprobó con la mediación de OIT y reconoce un régimen de sindicalización a los servidores públicos, derechos a negociación colectiva, ejercicio al derecho a huelga y fórmula de solución de conflicto colectivo.

Este proyecto de ley que reforma el IDAAN, ignora totalmente

estos grandes avances que contemplan el proyecto de ley por lo que los conceptos principios e instituciones que forman parte del proyecto de relaciones colectivas en el sector público, no pueden ser desconocidos en las relaciones laborales que rijan al IDAAN o a la Autoridad que el proyecto se propone crear, por lo tanto esto es un tema fundamental para discutir, el proyecto reconoce asociaciones de empleados cuando ya el derecho a sindicalización en el sector público ha sido reconocido por este gobierno y la Corte Suprema de Justicia y establece que a los trabajadores y funcionarios de la Autoridad, no se le aplicaran las disposiciones del Código de Trabajo, el Código Administrativo ni la Ley de Carrera Administrativa.

En cuanto al último punto de la Carrera Administrativa, el proyecto de ley no toma en consideración el último esfuerzo aprobado en consenso con los trabajadores del sector público respecto a un nuevo régimen de relaciones laborales en el sector público que está pendiente de

sanción en la Presidencia de la República.

En esta materia el proyecto de ley antes mencionado representa un gran avance que necesariamente debe incluirse en un nuevo régimen de relaciones laborales en este caso para el IDAAN y no puede ni debe ser excluido como lo hace este proyecto de ley.

Se establece que por vía de reglamento la Junta directiva determinara las reglas de excepción al régimen laboral aplicable a los funcionarios, reglamento que es desconocido pero que además sugiere que habrán excepciones en donde alguna categoría a funcionario no se le aplicaraá el régimen de relaciones laborales aprobado en este proyecto, situación grave que vulnera el principio de no discriminación y de igualdad.

Tomando en consideración que se habla de un plan general de empleo el cual debe ser aprobado y tomando en consideración por la facultad reglamentaria de la junta directiva en este proyecto de ley, es seguro que las lagunas e inconsistencia incongruencias y omisiones no prevista en este proyecto se trataran de establecer a través

de este mecanismo, lo que no da garantías que se respeten derechos fundamentales de los trabajadores y funcionarios como lo son las causales de despido y el trámite en caso de despido injustificado y la indemnización y reintegro en caso de despidos, estamos hablando de los artículos 73, 75 y 76 del proyecto.

El artículo 78 excluye sin decirlo el ejercicio del derecho a huelga en la Institución al establecer que el servicio no podrá interrumpirse total ni parcialmente, ni desmejorarse por causa alguna el funcionamiento de la Autoridad, quien podrá sancionar por estos hechos que incluye el despido. Este artículo no prohíbe la huelga, pero de hecho es lo que se establece y al no existir una regulación de los derechos colectivos de los trabajadores en materia de sindicalización, solución de conflictos colectivos, negociación de convenios colectivos y ejercicios al derecho a huelga, esta disposición da pie a la prohibición del derecho a huelga y la imposición de arbitrajes obligatorios que también es una forma de impedir el ejercicio de este derecho.

Enmateria derelaciones laborales, este anteproyecto atenta contra el derecho de los trabajadores de organizarse sindicalmente a negociar colectivamente y prohíbe la huelga, atenta contra la estabilidad laboral y da potestad sancionadora al administrador que incluye el despido sin reconocer el derecho al reintegro con los salarios caídos correspondientes, en sus disposiciones transitoria acepta y reconoce en su artículo 142 la reducción de personal incluso con estabilidad laboral.

Inconstitucionalmente desconoce la jurisdicción contenciosa administrativa y en materia de garantías constitucionales limita la facultad del Tribunal Constitucional de dictar medidas precautorias de suspensión del acto impugnado, esto lo establece el artículo 137.

En cuanto a los derechos de la oficina central de la Autoridad dirigida por el administrador, el artículo 81 establece que podrá determinar la contratación de terceros y determinar el personal necesario para el abastecimiento de agua y alcantarillados y en su numeral 2 de este artículo se establece de manera confusa que tendría el derecho a suspender, destituir, reducir en grado o salario o tomar cualquier acción disciplinaria contra los trabajadores en base a los reglamentos, esta norma sugiere la ilegal facultad de reducir salarios y decidir sobre la estabilidad de los trabajadores.

En síntesis este proyecto es lesivo, abre las puertas a la privatización del IDAAN, contiene visos de ilegalidad e inconstitucionalidad, desconoce el derecho a huelga y otros importantes derechos de los trabajadores.